

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintidós (2022)

DEMANDANTE	: MILTON YADIR BILBAO LOPEZ
DEMANDADO	: COLOMBIA MOVIL SA ESP
TIPO DE PROCESO	: Fuero sindical acción de reintegro
RADICADO NACIONAL	: 05001 31 05 011 2018 00639 02
RADICADO INTERNO	: 235-22
DECISIÓN	: REVOCA SENTENCIA
ACTA NÚMERO	: 218

En la fecha, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Segunda de decisión Laboral, se apresta a resolver el proceso de la referencia. El Magistrado de conocimiento, Doctor HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ, presentó a la Sala proyecto de sentencia, previa deliberación, se acuerda la siguiente solución al caso planteado.

ANTECEDENTES

Son pretensiones del demandante: 1. Sírvasse declarar que el vínculo laboral del demandante con la demandada terminó unilateralmente, sin justa causa por empleador y sin mediar autorización judicial a pesar de gozar de fuero sindical 2. Como consecuencia ordene el reintegro al demandante en las mismas o mejores condiciones laborales 3. Como consecuencia de la declaración se condene a la demandada a pagarle al demandante, la totalidad de los salarios y prestaciones sociales dejadas de devengar desde el momento en que fue desvinculado hasta el reintegro, declarando que para todos los efectos legales no existió solución de continuidad. Igualmente, el ajuste correspondiente a la seguridad social y emolumentos 4. Ordene indexar y 5. las costas del proceso.

HECHOS:

El demandante suscribió contrato individual de trabajo con la empresa demandada, como asistente soporte de ventas desde el 10 de julio de 2013, fue miembro adherente de la unión sindical de trabajadores de las tecnologías de la

información y la comunicación, actividades conexas y complementarias UNITRATEL, pues su vinculación se dio entre la fecha de fundación del sindicato y antes de la existencia del acto administrativo que aprueba la inscripción en el registro sindical. UNITRATEL se fundó el 5 de mayo de 2018, radicó la notificación el 8 de mayo de 2018, por ello a la fecha de despido no se había obtenido la certificación de existencia y representación legal. La afiliación del demandante fue el 11 de junio de 2018, informando a la accionada de ese hecho. El demandante fue desvinculado sin haberse solicitado autorización judicial. El 22 de agosto UNITRATEL solicitó el reintegro y el 5 de septiembre la empresa respondió negando la petición. Que el salario del actor era de \$3.306.000.

En auto del 28 de noviembre de 2019 el Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín vinculó a la unión sindical de trabajadores de las tecnologías de la información y comunicación, actividades conexas y complementarias, “UNITRATEL”

CONTESTACIÓN SINDICATO (cuaderno 2, pág. 158 y 159 expediente digital)

Señala que coadyuva todas las pretensiones, pues indica que son ciertos todos los hechos de la demanda

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA (cuaderno 2 expediente digital)

La demandada COLOMBIA MOVIL S.A en la contestación de la demanda en síntesis manifestó que se opone a la totalidad de las pretensiones incoadas en su contra y da respuesta a los hechos señalando que son ciertos en síntesis que, a partir del 10 de julio de 2013 al 21 de agosto de 2018 se desempeñó el actor como asistente de soporte de ventas, cuando fue despedido unilateralmente y debidamente indemnizado. Que el actor no ostenta la calidad de adherente porque sólo está previsto para los que se afilien al sindicato con posterioridad a su creación, pero antes del registro sindical y la creación de UNITRATEL fue el 5 de mayo de 2018 y el registro ante el ministerio es del 8 de mayo de 2018 y el Sr. Bilbao se afilió al sindicato el 11 de junio de 2018, notificándose a Colombia Móvil S.A. el 14 de junio de 2018, es decir más de un mes después del registro, por ello no gozó de fuero sindical. Que no es necesario la expedición del certificado de representación legal expedido por el ministerio del trabajo para su existencia y validez, siendo un requisito formal. Que, si en gracia de discusión se considerara que el fuero de adherentes se extiende por 2 meses después del registro sindical, tampoco gozará del fuero, pues ello habría culminado el 8 de julio de 2018, entonces para el 21 de agosto de 2018 fecha del despido ya se

había terminado la protección. Propuso como excepciones de fondo: INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN, Y COMPENSACIÓN.

DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

En sentencia del diecinueve (19) de agosto de dos mil veintidós (2022), el Juzgado Once Laboral de este Circuito, **ABSOLVIÓ** a COLOMBIA MOVIL S.A. ESP de todas las pretensiones formuladas en su contra por el demandante e impuso las costas a la parte actora.

IMPUGNACIÓN

Apela de lo resuelto la apoderada de la parte demandante, quien sustenta el recurso en audiencia. Manifiesta su oposición a la providencia señalando que el despacho confunde la radicación del acta con la inscripción en el registro sindical, se refiere a la sentencia T 733 de 2011, por ello se debe revisar el certificado del coordinador del grupo archivo sindical de julio 16 de 2018, inscribiendo al sindicato de industria UNITRATEL allegado con el expediente. Señala que la sentencia de la CSJ mencionada por el juez le da la razón al demandante cuando señala que se debe observar el certificado expedido por el grupo de coordinación del archivo sindical, conclusión contraria a lo dicho por el juez. Agrega que en el interrogatorio de parte, el actor no confesó nada, pues sus afirmaciones se habían señalado en los hechos de la demanda.

SON CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

Para resolver, es de resaltar que la competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de apelación, de conformidad con el artículo 57 de la Ley 2ª de 1984 y los artículos 10 y 35 de la Ley 712 de 2001, que modificaron los Arts. 15 y 66 A del C.P.T.S.S.

Se centra el problema jurídico en segunda instancia en determinar, si el accionante estaba protegido por el fuero sindical de adherente conforme el literal b. del artículo 406 del CPTSS y si ello es así, si debía la empresa solicitar autorización judicial antes de despedirlo y por ende de no haberlo hecho reintegrarlo y condenarla a pagarle al demandante, la totalidad de los salarios y prestaciones sociales dejadas de devengar desde el momento en que fue desvinculado hasta el reintegro.

No es objeto de controversia que el demandante suscribió contrato individual de trabajo con la empresa demandada, como asistente soporte de ventas desde el 10 de julio de 2013 hasta la fecha de despido. Que el sindicato UNITRATEL se fundó el 5 de mayo de 2018, radicó el acta de constitución el 8 de mayo de 2018, igualmente que el actor se afilió el 11 de junio de 2018, informando a la accionada de ese hecho el 14 de junio de la misma calenda. El demandante fue desvinculado el 21 de agosto de 2018, sin haberse solicitado autorización judicial. El 22 de agosto de 2018 UNITRATEL solicitó el reintegro y el 5 de septiembre la accionada respondió negando la petición. Que el salario del actor era de \$3.306.000

Pues bien, conforme el artículo 39 de la C.P., existe protección constitucional del fuero sindical.

“ART. 39. Los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones, sin intervención del Estado. Su reconocimiento jurídico se producirá con la simple inscripción del acta de constitución.

La estructura interna y el funcionamiento de los sindicatos y organizaciones sociales y gremiales se sujetarán al orden legal y a los principios democráticos.

La cancelación o la suspensión de la personería jurídica sólo procede por vía judicial.

Se reconoce a los representantes sindicales el fuero y las demás garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión.

“No gozan del derecho de asociación sindical los miembros de la fuerza pública.”

La Corte Constitucional en la Sentencia C-593 de 1993, ha señalado al respecto:

“La institución del fuero sindical es una consecuencia de la protección especial que el Estado otorga a los sindicatos para que puedan cumplir libremente la función que a dichos organismos compete, cual es la defensa de los intereses de sus afiliados. Con dicho fuero, la Carta y la ley, procuran el desarrollo normal de las actividades sindicales, vale decir, que no sea ilusorio el derecho de asociación que el artículo 39 superior garantiza; por lo que esta garantía mira a los trabajadores y especialmente a los directivos sindicales, para que estos puedan ejercer libremente sus funciones, sin estar sujetos a las represalias de los empleadores. En consecuencia, la garantía foral busca impedir que, mediante el despido, el traslado o el desmejoramiento de las condiciones de trabajo, se perturbe indebidamente la acción que el legislador le asigna a los sindicatos.”

Descendiendo a la norma legal, el artículo 405 del C.S.T., se denomina “**fuero sindical**”, aquella prerrogativa de que disfrutaban algunos trabajadores de no ser despedidos, ni desmejorados en sus condiciones de trabajo, ni trasladados a

otros establecimientos de la misma empresa o a un municipio distinto, sin justa causa previamente calificada por el juez del trabajo.

Debe la sala acotar, antes de proseguir en el estudio de este asunto que cuando es el trabajador el que demanda en este tipo de proceso especial, debe demostrar además de la relación contractual, el fuero sindical radicado en su cabeza y el despido.

El primer requisito y el último ya fueron aceptados por la demandada como se indicó, por ello a continuación se analizará si el actor tenía la calidad de aforado:

Según el artículo 406 del C.S.T., subrogado por el artículo 57 de la Ley 50 de 1990, modificado a su vez por el artículo 12 de la Ley 584 del 2000, están amparados con el fuero sindical:

*“ART. 406.—**Trabajadores amparados por el fuero sindical.** Están amparados por el fuero sindical:*

a) Los fundadores de un sindicato, desde el día de su constitución hasta dos (2) meses después de la inscripción en el registro sindical, sin exceder de seis (6) meses;

b) Los trabajadores que, con anterioridad a la inscripción en el registro sindical, ingresen al sindicato, para quienes el amparo rige por el mismo tiempo que para los fundadores;

c); d)...

PAR. 2º—Para todos los efectos legales y procesales la calidad del fuero sindical se demuestra con la copia del certificado de inscripción de la junta directiva y/o comité ejecutivo, o con la copia de la comunicación al empleador”.

Para resolver el problema jurídico debe la sala determinar que interpretación debe dársele al literal b del art. 405 del CST que en su primer aparte reza: “**Los trabajadores que, con anterioridad a la inscripción en el registro sindical, ingresen al sindicato...**”.

Para poder resolver la pregunta de marras, debe partirse de una premisa fundamental y es que los trabajadores tienen derecho a organizarse en sindicatos. El convenio 98 de la OIT establece una serie de medidas de protección para que este derecho sea ejercido sin ningún temor.

1. Los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo.

Deberán crearse organismos adecuados a las condiciones nacionales, cuando ello sea necesario, para garantizar el respeto al derecho. (art 3 y 8 del C 98).

Lo anterior se traduce en Colombia, que para garantizar el respecto a los sindicatos que se crean y a pesar de tener personería jurídica desde el acta de constitución, para que sus actos puedan tener efectos jurídicos frente al empleador y frente a terceros, deberán inscribir la asociación ante la autoridad, que para Colombia es el ministerio del trabajo, como un elemento de publicidad.

Como lo advierte la sentencia T 733 de 2011, *“la finalidad de este registro sindical, tal como lo señala el artículo 372 del C.S.T., es permitir que el sindicato pueda actuar como tal, ejercer las funciones que la ley y sus respectivos estatutos le señalen y ejercitar los derechos que le correspondan frente a terceros. Aspecto que permite afirmar que el citado registro, cumple con tres propósitos fundamentales que son la publicidad, la seguridad y la prueba de la organización sindical”*.

Obsérvese que el artículo 365 y 366 del Código Sustantivo del Trabajo, señalan como debe tramitarse **la inscripción en el registro sindical**:

“Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de la asamblea de fundación, el sindicato presentará ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, solicitud escrita de inscripción en el registro sindical, acompañándola de los siguientes documentos:

- a) Copia del acta de fundación, suscrita por los asistentes con indicación de su documento de identidad;
- b) Copia del acta de elección de la junta directiva, con los mismos requisitos del ordinal anterior;
- c) Copia del acta de la asamblea en que fueron aprobados los estatutos;
- d) Un (1) ejemplar de los estatutos del sindicato, autenticados por el secretario de la junta directiva;
- e) <Literal modificado por el artículo 4 de la Ley 584 de 2000. Nómina de la junta directiva y documento de identidad.
- f) <Literal modificado por el artículo 4 de la Ley 584 de 2000. Nómina completa del personal de afiliados con su correspondiente documento de identidad.
- g) <Literal derogado por el artículo 4 de la Ley 584 de 2000.>

Los documentos de que trata los apartes a), b) y c) pueden estar reunidos en un solo texto o acta.

Si se concuerda este artículo con el 361 del CST que trata de la fundación del sindicato se puede señalar que además de la reunión inicial constatada en el acta de fundación pueden existir otras dentro del término de 2 a 5 días para efectos de discutir y aprobar los estatutos y designar el personal directivo, que se traduce en otra u otras actas, las que se llevan aunada a la documentación arriba mencionada, con la solicitud escrita de inscripción en el registro sindical,

por tanto el día que se entrega la petición ante el ministerio, se debe entender esta acción como el inicio de un trámite para que sea registrada la nueva asociación y se inicia el trámite al interior del ministerio que lo refiere el **ARTICULO 366.** modificado por artículo 46 la Ley 50 de 1990.

“1) Recibida la solicitud de inscripción, el ministerio del trabajo y seguridad social, dispone de un término máximo e improrrogable de quince (15) días hábiles, contados a partir de la fecha de su presentación, **para admitir, formular objeciones o negar la inscripción en el registro sindical.**

2) En caso de que la solicitud no reúna los requisitos de que trata el artículo anterior, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social formulara por escrito a los interesados las objeciones a que haya lugar, para que se efectúen las correcciones necesarias.

En este evento el Ministerio de Trabajo dispone de diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud corregida, para resolver sobre la misma.

(...)”

De la lectura atenta a este artículo, se puede colegir sin dubitación alguna que, una vez realizada la solicitud, el Ministerio del trabajo, dispone de un término máximo de 15 días hábiles, contados a partir de la fecha de su presentación, para desarrollar el trámite de inscripción, esto es **para admitir, formular objeciones o negar la inscripción en el registro sindical.**

Lo anterior, es necesario para revisar la integralidad de los requisitos y que se acompañan a la constitución y lo exigido por la ley o sino para objetar la solicitud, verbigracia la falta firmas, cédulas, la falta de nóminas o los estatutos son contrarios a la Constitución o la ley o no se tenga el número mínimo exigido por la ley para que surja la asociación sindical, es porque no se puede argumentar que la inscripción se debe entender como el mero acto de solicitud de la misma.

Tan es así, que se requiere un trámite adicional a la mera solicitud inscripción del sindicato en el registro sindical, que el numeral 3 del susodicho artículo señala: “... 3) Vencidos los términos de que tratan los numerales anteriores, sin que el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social se pronuncie sobre la solicitud formulada, **la organización sindical quedará automáticamente inscrita en el registro correspondiente.**”

En otras palabras, para que pueda entenderse inscrito un sindicato debe realizarse el trámite de admitir, hacer objeciones o negar dentro de los 15 días sino opera un silencio administrativo positivo, entendiéndose aprobada la inscripción.

Pero aún más, para dar soporte a esta razón obsérvese que el artículo 367 y 368 modificado por el artículo 47 de la Ley 50 de 1990. Señala:

“El acto administrativo por el cual se inscriba en el registro una organización sindical, deberá ser publicado por cuenta de ésta una sola vez en un diario de amplia circulación nacional, dentro de los diez (10) días siguientes a su ejecutoria. (subrayas fuera del texto).

Es decir, para que exista una inscripción del sindicato en el registro, se requiere de un acto administrativo expreso o tácito de la autoridad pública.

De lo anterior, se colige sin dubitación alguna, que la creación de una organización sindical implica la personería jurídica o **la existencia de ésta, y es a partir de allí que** los miembros fundadores **gozan del beneficio del fuero sindical**, no pudiendo ser despedidos, trasladados o desmejorados sin el permiso previo que otorga el juez del trabajo, pero el sindicato sólo podrá actuar válidamente frente a terceros y ejercer las funciones contempladas en los artículos 373 y 374 del Código Sustantivo del Trabajo, a partir de su **inscripción** en el registro sindical ante el Ministerio de la Protección Social, por efectos de las funciones de publicidad y prueba de la organización sindical.

Igual debe quedar claro, por efectos pedagógicos que,

“...en el evento de negarse la inscripción de la asociación sindical por no cumplir con los requisitos señalados en la norma correspondiente, dicho sindicato, a partir de ese momento se entenderá sin personería jurídica y en consecuencia, desaparecerá la protección foral de sus afiliados”. C 733 de 2004.

Resuelto el tema de que la inscripción en el registro sindical, no se agota por la mera solicitud de inscripción, sino que se requiere de un trámite ante el ministerio que culmina a través de una resolución o acto administrativo, pasa la sala a darle el sentido más lógico y más acorde a los convenios internacionales y la constitución al literal b del art. 406 del CST, para determinar la existencia del fuero sindical o no del actor.

b) Los trabajadores que, con anterioridad a la inscripción en el registro sindical, ingresen al sindicato, para quienes el amparo rige por el mismo tiempo que para los fundadores;

Desde el punto de vista lógico, de los principios, los convenios 87 y 98 y la doctrina del comité de libertad sindical de la OIT relativos a la libertad sindical y protección a quienes ejercen el derecho de sindicación, no es aceptable que el

legislador entendiera que el fuero de adherente sólo pudiese presentarse cuando el trabajador se acoge a la asociación máximo 5 días después de la fundación, pues es ese el termino obligatorio para acudir a realizar la solicitud de registro sindical y que sólo a ellos se aplicara el término de dos meses contemplado en el literal a) del artículo o el termino de seis meses que hace referencia al tiempo que puede extenderse la protección frente a una eventual demora en que pueda incurrir la autoridad competente para realizar la inscripción.

Es que precisamente la protección del trabajador con fuero sindical se vislumbra en el bloque de constitucionalidad con el **art. 11 del convenio 98**, ratificado por Colombia y con la misma fuerza vinculante que la Carta política de Colombia cuando señala que *“Todo Miembro de la OIT...se obliga a adoptar todas las medidas necesarias y apropiadas para garantizar a los trabajadores y a los empleadores el libre ejercicio del derecho de sindicación. El convenio 135 Artículo 1 cuando se refiere a que “Los representantes de los trabajadores en la empresa deberán gozar de protección eficaz contra todo acto que pueda perjudicarlos...”*. y con la Constitución política el art. 39 al reza: *“... Se reconoce a los representantes sindicales el fuero y las demás garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión.”*

En conclusión, como lo ha resaltado la Corte Constitucional en numerosas ocasiones, entre otras, la sentencia T 029 de 2004 que la garantía foral busca impedir que, mediante el despido, el traslado o el desmejoramiento de las condiciones de trabajo, el empleador pueda perturbar indebidamente la acción legítima que la Carta reconoce a los sindicatos.

Ahora bien, del análisis de la sentencia de tutela STL 315 de 2022, que fue el precedente utilizado por el juez de instancia para argumentar de fondo y absolver de las pretensiones, lejos y contraria es esta jurisprudencia, para poder resolver el problema jurídico planteado.

En ese contexto, el Tribunal Superior entre otros argumentos se refirió a la Resolución N° 810 de 2014 emanada por el Ministerio de Trabajo, que resulta a favor de la tesis de la presente sala, pues está relacionada con el trámite administrativo mediante el cual se inscribe a la organización sindical en el Kardex, una vez cumplidos los requisitos Constitucionales y legales, indicando que:

“Nótese cómo el fuero se extiende hasta que se haga la inscripción en el libro de registro por parte del Ministerio de Trabajo: así; una interpretación lógica de las normas permite concluir que el fuero no se limita a los trabajadores que

se afiliaron a la organización antes de la SOLICITUD de inscripción que presenta al sindicato, sino que se extiende hasta que el Ministerio realice la inscripción en el registro sindical. Y esta extensión resulta relevante porque, como bien se acotó anteriormente, la solicitud de inscripción puede ser objetada, lo que dejaría a los integrantes de la organización sin protección ante el empleador que desee despedir, desmejorar o trasladar a los trabajadores en detrimento de su derecho de asociación [...].

Y en el caso concreto de la tutela, la Corte suprema de justicia: “...destacó que la asamblea de constitución de la organización SINSECOL se llevó a cabo el **«8 de noviembre 2018»** y el registro sindical se realizó **«el 14 de noviembre de esa anualidad»**, circunstancia de la cual daba cuenta la certificación emitida por el Coordinador del Grupo de Archivo Sindical en la que se indicaba:

“Que, revisada la base de datos de Archivo Sindical, parece inscrita y vigente la organización Sindical denominada “SINDICATO DE LA SEGURIDAD PRIVADA DE COLOMBIA – SINSECOL” de primer grado y de industria, **con Registro Sindical número 2018004076 del 14 de noviembre de 2018**, con domicilio en Cali, departamento del Valle del Cauca”.

Concluyendo que el actor *«se afilió a la organización sindical **el 21 de noviembre de 2018»**, es decir **se afilió a la organización sindical siete días después de (sic) se hubiese efectuado por parte del Ministerio del Trabajo la inscripción en el registro»** (sic).*

Para el caso concreto, se tiene probado que existe un sindicato denominado “unión sindical de trabajadores de las tecnologías de la información y la comunicación, actividades conexas y complementarias UNITRATEL”, asociación que se fundó el **5 de mayo de 2018**, la misma que radicó el acta de constitución y solicitud de inscripción el **8 de mayo de 2018** ante el ministerio del trabajo, igualmente que el actor se afilió el **11 de junio de 2018** al sindicato de marras, informando a la demandada Colombia móvil de ese hecho el 14 de junio de la misma calenda. El demandante fue desvinculado el **21 de agosto de 2018**, sin haberse solicitado autorización judicial, así mismo el 22 de agosto de 2018 UNITRATEL solicitó el reintegro del Sr. Bilbao López y el 5 de septiembre la accionada respondió negando la petición argumentando que a la fecha de despido no se cumplía con los presupuestos del artículo 406 del CST. (fls. 11 a 16 del cuaderno 2 expediente digital).

Existe prueba concluyente del proceso de inscripción del sindicato en el registro procesal, con la documental allegada por la parte demandante como es el certificado del coordinador del grupo de archivo sindical que se refiere a que revisada la base de datos está inscrita y vigente la asociación sindical

UNITRATEL, asociación de primer grado, de industria con número de inscripción 2018050100013382-16072018 del 16 de julio de 2018, es a partir de allí que se debe aplicar el literal a y b del art. 406 del CST, esto es, *“desde el día de su constitución hasta dos (2) meses después de la inscripción en el registro sindical, sin exceder de seis (6) meses”*, es decir que los dos meses de protección foral se cumplían el 16 de septiembre de 2018 y el Sr. Bilbao López fue despedido por la accionada el 21 de agosto de 2018, sin haber solicitado permiso al juez laboral del circuito para levantar el fuero de protección, pues como ya se demostró, su vinculación como afiliado adherente se dio entre la fecha de fundación del sindicato y antes de la existencia del acto administrativo que aprueba la inscripción en el registro sindical.

Como consecuencia de lo anterior, se deberá ordenar el reintegro del demandante al mismo cargo u otra similar, debiéndose condenar a la demandada a pagarle al demandante los salarios y prestaciones sociales dejadas de devengar desde el momento en que fue desvinculado hasta el efectivo reintegro, declarando que para todos los efectos legales no existió solución de continuidad. Igualmente se deberá pagar la seguridad social. Dicha condena deberá ser indexada.

Así mismo dado que se propuso como excepción la COMPENSACIÓN, la misma saldrá avante y por ende, se autoriza a la empresa demandada para que de las sumas adeudadas al actor según la condena impartida en esta sentencia, compense las sumas que este ya recibió con ocasión de la terminación unilateral del contrato sin justa causa, debidamente indexada.

Se condenará en costas en ambas instancias a favor de la parte demandante y a cargo de la demandada, de conformidad con lo establecido en el numeral 04 del artículo 365 del C.G.P que consagra que: “Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias”. En esta instancia se fijan como agencias en derecho la suma de \$1.000.000, a cargo de la demandada y en favor del trabajador demandante.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Segunda de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO. REVOCAR la sentencia de fecha y origen conocidos, emitida por el Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín, que absolvió a COLOMBIA MOVIL S.A E.S.P de las pretensiones de la demanda para en su lugar DECLARAR que el vínculo laboral del Sr. MILTON YADIR BILBAO LOPEZ con la demandada terminó unilateralmente, sin justa causa por parte del empleador y sin mediar autorización judicial de levantamiento del fuero sindical.

SEGUNDO: ORDENAR a Colombia Movil S.A E.S.P el reintegro al demandante al mismo cargo u otra similar.

TERCERO: CONDENAR a la demandada a pagarle al demandante a título de indemnización y de manera indexada, los salarios y prestaciones sociales dejados de devengar desde el momento en que fue desvinculado hasta el efectivo reintegro al cargo, declarando que para todos los efectos legales no existió solución de continuidad. Igualmente se condena al pago de la seguridad social.

CUARTO: Prospera la excepción de COMPENSACIÓN a favor de la accionada, por lo que se AUTORIZA a la empresa demandada para que, de las sumas adeudadas al actor según la condena impartida en esta sentencia, compense las sumas que este ya recibió con ocasión de la terminación unilateral del contrato sin justa causa, debidamente indexada.

QUINTO: Se CONDENAN en costas en ambas instancias a favor de la parte demandante y a cargo de la demandada, de conformidad con lo establecido en el numeral 04 del artículo 365 del C.G.P. En esta instancia se fijan como agencias en derecho la suma de \$1.000.000, a cargo de la demandada y en favor del trabajador demandante.


Notifíquese lo resuelto en EDICTO y se ordena devolver el expediente al Juzgado de origen y para constancia se firma.

Los Magistrados:


HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ



GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ



CARMEN ELENA CASTAÑO CARDONA



SECRETARÍA SALA LABORAL
EDICTO VIRTUAL

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la sentencia que a continuación se relaciona:

DEMANDANTE	: MILTON YADIR BILBAO LOPEZ
DEMANDADO	: COLOMBIA MOVIL SA ESP
TIPO DE PROCESO	: Fuero sindical acción de reintegro
RADICADO NACIONAL	: 05001 31 05 011 2018 00639 02
RADICADO INTERNO	: 235-22
DECISIÓN	: REVOCA SENTENCIA
ACTA NÚMERO	: 218

Magistrado Ponente

HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/126> por el término de un (01) día hábil. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Fijado el 25 de agosto de 2022 a las 8:00am

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

Se desfija el 25 de agosto de 2022 a la 5:00pm



RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
SECRETARIO

Radicado Único Nacional 05-001-31-05-011-2018-00639-02
Radicado Interno 235-22